



AP PHOTO / SUNDAY ALAMBA

Eclipsados por un anuncio espectacular de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que resultaron ganadores durante las elecciones del año pasado, vendedores callejeros de Lagos venden comida y discos compactos.

El nuevo dirigente de Nigeria promete abatir la corrupción y mejorar los servicios

Aumentaron las demandas de una más justa distribución de los ingresos procedentes del petróleo y de uso eficaz de los fondos públicos

POR MARTINS OLOJA

Un año después de haber llegado al poder, el presidente de Nigeria, Umaru Yar'Adua enfrenta problemas de enormes proporciones. Los primeros en la lista son la prestación de servicios adecuados a los nigerianos y la obligación de garantizar la responsabilidad fiscal del gobierno.

Si bien esos son problemas comunes en cualquier país federal, en Nigeria representan un reto todavía mayor debido a la

presencia de una atroz corrupción. Los estudios de Transparencia Internacional indican una corrupción rampante en Nigeria y en una encuesta reciente, más de 70 por ciento de los nigerianos dijo que la corrupción afecta en gran medida sus vidas personales y las de sus familias.

Cuando empezó su período de gobierno, el presidente Yar'Adua prometió cero tolerancia a la corrupción. Llegó al poder en circunstancias no del todo claras, pero su autoridad creció en agosto pasado con

la desestimación de dos cargos de fraude electoral en su contra. Sin embargo, la absolución ha sido apelada.

Además de la corrupción, la pobreza también prolifera en Nigeria y los estudios nos demuestran que los pobres son las víctimas principales de la corrupción porque tienen que desembolsar grandes sumas de sus magros recursos en sobornos para el pago de los que deberían ser servicios gubernamentales públicos.

El anterior presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, empezó como un reformador que buscaba mejorar los servicios gubernamentales. En 2003, contrató a

Martins Oloja es periodista de temas públicos del periódico *Guardian* de Nigeria. Ha cubierto los asuntos de política y políticas públicas en la capital de Nigeria durante casi dos décadas.

Wendy Thompson, entonces asesora especial para la reforma de los servicios públicos del primer ministro británico Tony Blair, para que colaborara en la creación de un marco de reforma de los servicios públicos en Nigeria.

Se encienden los focos rojos

En abril de 2004, después de unos cuantos meses en Nigeria, la señora Thompson informó que los servicios de Nigeria “no dan una buena atención a la gente”. “Sobre todo, son inaccesibles, (de) mala calidad y ajenos a las necesidades de los clientes”, dijo la señora Thompson. “A pesar de sus ambiciones políticas, los ministros carecen de la influencia para garantizar que los servicios se presten al público. Los departamentos centrales tienen poca información para monitorear el desempeño o intervenir para tratar de resolver las fallas. Con frecuencia, el financiamiento impredecible e incierto sólo es suficiente para los pagos de personal y no para el mantenimiento de instalaciones y sistemas o para la prestación de servicios. Los servicios de apoyo no están diseñados para apuntalar los servicios de primera línea, y son un impedimento mayor para hacerse del personal, los bienes y la información necesarios”.

Su mordaz informe sostenía que las reformas “se llevarían a cabo en un terreno que constituye un reto como resultado de años de desgobierno, corrupción sistemática e incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de servicios públicos de la gente. La confianza ciudadana es baja; el nivel de desigualdad es alto y los arreglos institucionales son confusos y dispendiosos. Lo que se necesita es una transformación de gran alcance de la sociedad nigeriana que involucre al gobierno y a las otras partes interesadas”.

A pesar de las quejas para que el servicio público fuera reformado, la respuesta fue muy poco estimulante.

El índice de libertad económica publicado por la Fundación Heritage y el *Wall Street Journal* fue igualmente mordaz en su evaluación.

“A pesar de esfuerzos más enérgicos para responsabilizar a los funcionarios gubernamentales de actividades ilícitas, la corrupción sigue siendo algo común en todos los niveles de gobierno y en la rama judicial. La actividad económica se desenvuelve en gran medida en el sector informal”.

Además de los 36 estados y el territorio de la capital federal, existen 776 concejos locales que dependen fundamentalmente de los recursos de la cuenta federal. La Constitución establece que esta cuenta debe recibir prácticamente todo el ingreso del gobierno nigeriano para ser compartido por los tres órdenes de gobierno. La Constitución responsabiliza al Presidente

de informar periódicamente a la Asamblea Nacional sobre las asignaciones de esta cuenta. La cuenta de la federación se nutre principalmente de los ingresos nacionales de petróleo y gas. Nigeria está clasificado como el décimo productor mundial de petróleo. En 2003, se informó que durante los últimos 25 años Nigeria ha recibido 300 mil millones de dólares estadounidenses por ingresos petroleros después de la

servicio público han hecho que las instituciones democráticas no rindan cuentas.

Nunca sonó la alerta

El federalismo nigeriano no fue diseñado para la prestación eficaz de servicios sino para aumentar la unidad nacional entre los diversos grupos étnicos. Con una asignación de recursos muy favorable al gobierno federal, los gobiernos subnacio-



AP PHOTO/SAURABH DAS

Con cantos y bailes, mujeres ijaw llevan a cabo una manifestación de protesta en demanda de empleos afuera de una estación de combustible de Chevron Texaco cerca del pueblo de Abiteye en Nigeria, en julio de 2007.

deducción de los pagos a las compañías extranjeras.

Pero a pesar de esta magnitud de ingresos, no hay prestación de servicios a la ciudadanía, no se abate la pobreza y la economía no es sana.

Por ejemplo, la proporción de nigerianos que viven por debajo de la línea de pobreza establecida por la Organización de las Naciones Unidas, que es de un dólar estadounidense al día, aumentó de 27 por ciento en 1980 a 70 por ciento en 2000. Desde entonces ha bajado a poco más de 50 por ciento. En 2006, Nigeria ocupó el lugar 165 entre los 179 países comprendidos en el índice del PIB del Fondo Monetario Internacional que compara el poder de compra de bienes de una misma canasta básica.

Con los fondos disponibles para los tres órdenes de gobierno, debería existir un suministro adecuado de agua potable, electricidad, servicios de salud, escuelas y calles. Pero no es así. Un sistema federal disfuncional y la falta de una cultura de

nacionales dependen del gobierno central para financiar sus obligaciones de servicios, que incluyen el orden público, el comercio intraestatal, la educación, la política estatal de salud, las carreteras estatales y el transporte público.

Ante el hecho públicamente conocido de que los fondos asignados a servicios sociales y mejoras de capital se extravían antes de llegar a su destino, las alarmas deberían dispararse, pero hace mucho tiempo que no se cumple la disposición constitucional de practicar auditorías.

De acuerdo con la Constitución de 1999, el auditor general de la federación y los auditores generales de los 36 estados están facultados para expedir requerimientos de auditoría si no existe información satisfactoria sobre los fondos asignados.

El Presidente y los gobernadores nombran a los auditores entre un grupo de funcionarios del área de finanzas, pero una vez confirmados por la Asamblea Nacional y las estatales, los auditores dejan de pertenecer al poder ejecutivo y le rinden cuentas al comité de cuenta



pública de la legislatura que les corresponda. Sin embargo, los informes de los auditores casi nunca están listos oportunamente ni las organizaciones civiles o los medios de comunicación vigilan lo suficiente para utilizar el sistema de auditorías para seguirle la pista a los fondos públicos de Nigeria y prevenir que sean saqueados.

Al centro le toca la mejor parte

A pesar de las protestas de los estados y municipios por la desigualdad de las responsabilidades fiscales y del financiamiento, la asignación de ingresos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales sigue siendo desigual. La Constitución de 1999 determina que la cuenta de la federación donde se depositan los ingresos procedentes del petróleo y de otras fuentes pertenece a los tres órdenes de gobierno. Pero los 36 gobernadores estatales argumentan que con la cooperación del contador general de la federación, la cuenta de la federación “con frecuencia se maneja, se destina y se manipula de manera unilateral, arbitraria e ilegal por las autoridades centrales.”

Un estudio de G. D. Olowononi, de la Universidad Ahmadu Bello, concluyó en 2004 que, entre 1993 y 1998, el gobierno federal gastó más de 70 por ciento del ingreso público total.

En 1981, la parte correspondiente al gobierno central de la cuenta federal fue de 55 por ciento, los estados recibieron 30 por ciento y los gobiernos locales obtuvieron 10 por ciento. Pero en 1992, cuando le fue asignada a estos últimos la responsabilidad adicional de administrar y financiar la educación primaria, el gobierno federal redujo de 30 a 25 por ciento la parte correspondiente a los estados de la cuenta de la federación.

También fracasó el cabildeo para reducir a 33 por ciento o menos la parte correspondiente a la federación, ya que en 1992 sólo se logró una asignación de 1.5 por ciento a fondos especiales. El control de las reservas especiales —como el fondo de estabilización, el fondo fiduciario del petróleo y el superávit de intervención del mercado autónomo de divisas— permitió que las autoridades centrales pudieran reducir el ingreso disponible para los gobiernos subnacionales. Al gobierno federal le corresponde 48.5 por ciento de la cuenta federal y los estados y concejos locales comparten el resto.

Yar'Adua es perseguido por la amenaza de un conflicto continuado en la región del Delta del Níger, donde están las reservas petroleras del país, y para conjurarlo dio un paso hacia la asimetría que podría revertirse. En 2008, dio a conocer su pre-

supuesto de 2.4 billones de nairas (alrededor de 20 mil millones de dólares estadounidenses) en el que reservó la enorme cantidad de 444 600 millones de nairas (alrededor de 3 700 millones de dólares estadounidenses) sólo para enfrentar los problemas de seguridad y para el Delta del Níger.

El Delta incluye nueve de los 36 estados de Nigeria, que ya reciben 13 por ciento adicional de los ingresos procedentes del petróleo y gas de la cuenta de la



A su llegada a la Corte Suprema de Abuja, en julio de 2007, el ex gobernador del estado de Jigawa, Nigeria, niega los cargos de corrupción que se le imputan.

REUTERS/AFOLABI SOTUNDE

los servidores públicos y aumentará la transparencia en actividades fiscales. El Presidente dijo que había aprobado el proyecto de ley después de haber consultado a los gobernadores estatales, quienes acordaron promulgar legislaciones similares.

Se busca: financiamiento para infraestructura

Pero a pesar de las promesas de mayor transparencia, todavía está por verse de dónde procederán los fondos para mejorar la infraestructura. No existen disposiciones presupuestarias para el proyecto de megaciudad en Lagos, que empezó la administración de Obasanjo. Lagos, con 14 millones de personas, es la ciudad más poblada del país.

Todavía pueden presentarse muchos problemas si se espera que el gobierno estatal de Lagos, actualmente controlado por un partido de oposición, cuestione la asignación presupuestaria sin precedente a la volátil área del Delta del Níger.

Debido a que las dependencias encargadas de evitar las corruptelas esperan apoyo político para interponer una acción judicial contra los ex funcionarios que hayan cometido algún robo, ha surgido la preocupación de que la administración de Yar'Adua no esté completamente comprometida a completar la reforma integral de servicios públicos comenzada durante el gobierno del ex presidente Obasanjo.

Por ejemplo, desde el 29 de agosto de 2008, la administración ha tomado juramento a nueve secretarios federales permanentes y ha retirado a otros dos. Pero a los burócratas de mayor rango —directores de finanzas de los ministerios, agencias y dependencias— todavía no les han sido asignadas sus responsabilidades. En un sistema de pesos y contrapesos, la integridad en las finanzas sólo puede

lograrse con funcionarios contables competentes y honestos que vigilen el gasto; de lo contrario, los fondos se extravían y no se rinden cuentas de ellos.

Es evidente que la responsabilidad fiscal y la prestación de servicios seguirán siendo un reto para la administración del presidente Yar'Adua. Para vencerlo, la administración ha descansado hasta ahora en el mantra de su “compromiso para fortalecer el estado de derecho”. No queda claro cuándo pasará el régimen de la retórica a la acción.

federación.

Como resultado, los fondos que requieren los servicios críticos de todo el país en los terrenos de educación, salud, recursos hídricos, reducción de la pobreza y energía, quedaron eclipsados por los gastos del Delta del Níger en el presupuesto nacional de Yar'Adua.

Pero la política es un acto de equilibrio y las aclamaciones estallaron cuando el Presidente anunció que había dado su aprobación para que el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, propuesto desde hacía cuatro años, se convirtiera en ley. La ley inculcará disciplina presupuestaria en